

UNA PUBLICACIÓN DE LA CORPORACIÓN **Viso Muto** 

Cambio de rumbo:

Los esfuerzos bolivianos por reemplazar la versión prohibicionista del "desarrollo alternativo" de los EE. UU.



POR: LINDA FARTHING Y THOMAS GRISAFFI

Cambio de rumbo: los esfuerzos bolivianos por remplazar el "desarrollo alternativo" de la guerra contra las drogas de EE.UU. (2006-2019)

por Linda Farthing y Thomas Grisaffi

Linda Farthing es académica independiente y periodista. Es coautora de cuatro libros sobre Bolivia, el último de los cuales es Coup: A Story of Violence and Resistance in Bolivia (Haymarket 2021). Ha escrito artículos periodísticos, académicos y políticos sobre cuestiones relacionadas con la coca y la cocaína en Bolivia desde la década de 1990.

Thomas Grisaffi es profesor visitante de Geografía Humana en la Universidad de St Gallen Suiza. Es autor de Coca yes, Cocaine no: How Bolivia's Coca Growers Reshaped Democracy (Duke 2019) y coeditor de Cocaína: De los campos de coca a las calles (Duke 2021).

Resumen

Este estudio examina el desarrollo alternativo dirigido a la hoja de coca en Bolivia con énfasis en la política de "coca sí, cocaína no" adoptada por el gobierno de Evo Morales (2006-19). El artículo rastrea cómo la política de drogas ha evolucionado desde las tentativas de erradicación militarizada lideradas por Estados Unidos, pasando por los esfuerzos liderados por la Unión Europea dirigidos a fortalecer los gobiernos municipales, hasta la 'nacionalización' del gobierno de Evo Morales, que permite a los cultivadores registrados una cantidad limitada de coca. Este enfoque empoderó a las comunidades cocaleras para autocontrolarse y restringir las plantaciones de coca, fomentó la autodeterminación en la planificación e implementación del programa y abordó las causas profundas del cultivo de coca anticipando la asistencia para el desarrollo y ampliando la presencia civil del Estado. Y, sin embargo, a pesar de los importantes logros, dado el contexto general del paradigma internacional de la prohibición, existen claras limitaciones a la viabilidad de políticas orientadas al desarrollo en las estrategias de control de drogas, con fuerzas poderosas que frenan la innovación interna.

Introducción

Bolivia estuvo sometida durante más de veinte años a la Guerra contra las Drogas financiada por Estados Unidos, incluidas sus políticas de "desarrollo alternativo" que desplegaron diversas estrategias infructuosas condicionadas a la erradicación previa para sustituir los cultivos de coca por cultivos lícitos. Pero entre 2006 y 2019, el Gobierno de Evo Morales emergió como líder mundial con el primer enfoque participativo y no violento para el control de los cultivos de coca. La política conocida como "coca sí, cocaína no" se basó en un acuerdo de 2004 que permite a los cultivadores una cantidad limitada de coca para

garantizar la subsistencia y trabajó para empoderar a los cultivadores para que se auto vigilaran de modo que ellos y sus vecinos respetaran dicho límite.

En este documento se sostiene que el control de los cultivos considerados ilegales tiene más éxito cuando la ayuda al desarrollo no está condicionada a que los agricultores erradiquen primero sus cultivos y cuando la ayuda se concentra en garantizar la existencia de fuentes de ingresos alternativas antes de iniciar cualquier medida de erradicación (una estrategia conocida como "secuenciación") (Brombacher y David, 2020). Combinado con una supervisión participativa y tecnológicamente sofisticada, programas de desarrollo económico y una coerción mínima, este enfoque prepara mejor a los agricultores para diversificar su producción agrícola y reducir la dependencia de una cosecha ilegal. A pesar de muchos retos y pasos en falso, la experiencia boliviana ofrece una orientación mucho mejor para el control de los cultivos de coca y la política de desarrollo que el modelo estadounidense y es con este espíritu que publicamos nuestra investigación en Colombia.¹

Antecedentes de la coca en Bolivia.

La larga historia del cultivo del arbusto de coca (*Erythroxylum coca*) en las estribaciones semitropicales de los Andes es 3000 años anterior a la llegada de los europeos. Para las sociedades indígenas, la coca desempeña un papel fundamental en las iniciaciones, los matrimonios y los ritos funerarios, así como para garantizar la fertilidad de la tierra. Compartir y consumir coca fomenta la confianza y la comunidad, y sirve como componente ritual en todos los intercambios (Carter y Mamani, 1986). Aunque proporciona innumerables beneficios sociales y para la salud,² desde el descubrimiento de la cocaína a mediados del siglo XIX, cantidades cada vez mayores del cultivo boliviano se destinan a este fin sin que

¹ Los dos autores llevamos más de 40 años investigando la política antidroga en el Chapare, al este de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Linda fue cofundadora de la Red Andina de Información, un grupo de extranjeros residentes en Bolivia que protestaron contra la política de Estados Unidos a partir de 1990, criticando tanto su ineficacia como sus grandes costes para las familias cocaleras. Ella tuvo un papel decisivo en la primera publicación de AIN, "Bolivia: Violaciones de los derechos humanos y la guerra contra las drogas" (1995), y colaboró estrechamente con Human Rights Watch en su informe ampliado de 1996. También dirigió grupos educativos de estudiantes y turistas en el Chapare, escribió un capítulo de un libro sobre la Ley 1008 de control de drogas que fue impuesta por EE.UU., así como "Repensar el desarrollo alternativo" para WOLA. Es coautora de "Habeas Coca: Control Social de la Coca en Bolivia" en 2014, y ha publicado numerosos artículos sobre la política de drogas en Bolivia en The Guardian, NACLA, Al Jazeera y The Conversation (incluyendo varios con Tom Grisaffi). Tom Grisaffi vivió en el Chapare durante más de tres años, y mantiene una amplia red allí, completando un doctorado en Antropología (Manchester) sobre radios comunitarias de cocaleros que dio lugar al libro "Coca Sí, Cocaína No" (Duke 2019). Juntos, Linda y Tom trabajaron con colegas peruanos para publicar "De criminales a ciudadanos: The applicability of Bolivia's community based coca control policy to Peru" (World Development, 2021). Próximamente publicaremos un artículo: "A su propia manera: Cómo la organización cocalera amplió los derechos de las mujeres indígenas en Bolivia" (Latin American Research Review, 2024).

² Las suaves cualidades estimulantes de la coca mitigan el hambre y la fatiga, facilitan la digestión, reducen el mal de altura y aportan proteínas, vitaminas y minerales.

existan límites claros que separen los usos tradicionales del mercado ilícito de cocaína. En 2021 se cultivaron 30.500 hectáreas de coca, lo que representa sólo el 12,5% de la producción mundial (ONUDD 2023). El consumo tradicional de hoja de coca en Bolivia requiere unas 14.700 hectáreas, según un estudio de 2013 financiado por la Unión Europea (UE), lo que significa que algo más de la mitad de la producción actual se transforma en cocaína (CONALTID 2013; ONUDD 2023).

Los Yungas y el Chapare, las dos principales regiones cocaleras de Bolivia, han padecido históricamente malas condiciones de vida, aunque debido a la coca los ingresos son superiores a los del altiplano y los valles, y se sitúan en la media de las zonas bajas del país (CEDIB ND). Incluyendo la pequeña zona Norte de La Paz en el norte del departamento de La Paz, las regiones cocaleras tienen una población total estimada de unas 650.000 personas (EDISC 2021). La coca es un cultivo casi ideal: crece como una mala hierba en laderas empinadas, en suelos ácidos y a mayor altitud; es ligera y fácil de transportar; alcanza la madurez al cabo de un año; y puede cosecharse una vez cada tres o cuatro meses, generando mayores beneficios que cualquier otro cultivo. Las principales herramientas necesarias (un machete, un palo para cavar y un pulverizador de mochila) son fáciles de conseguir y baratas. Y lo que es más importante, aunque los precios fluctúan considerablemente, la demanda constante de la hoja durante los últimos cincuenta años ha garantizado un mercado. La mayoría de las labores necesarias para la producción de coca son aptas para mujeres u hombres, como la plantación, la fertilización, la cosecha y el transporte de la hoja de coca. Sin embargo, la comercialización de la hoja de coca está dominada por las mujeres (Alvarado 2020).

Aproximadamente dos tercios de los cultivos de coca de Bolivia se sitúan en los Yungas, una región semitropical al este y noreste de la ciudad de La Paz (ONUDD 2023). La mayoría de los 30.000 cocaleros de la zona son de origen Aimara, pero también hay una importante población afroboliviana. La coca se cultivó allí primero para abastecer al imperio Tiwanaku, luego al imperio Inca y más tarde, durante el periodo colonial, a las minas de Potosí (Klein 1986). La hoja de coca de Yungas es muy apreciada, ya que se considera que las hojas pequeñas, verdes y dulces son las mejores para los usos tradicionales.

El cincuenta y cinco por ciento de la tierra cultivada en los Yungas se dedica a la coca, contribuyendo al ochenta por ciento de los ingresos agrícolas de la región, mientras que el resto se dedica a frutas tropicales y café (ONUDD 2023). Alison Spedding (1997) describe la coca como un "hecho social total" en los Yungas, central al tejido social, político, simbólico y económico de las comunidades aimaras. Las laderas de los Yungas son

empinadas, lo que significa que las familias se ven limitadas a emplear trabajo manual en la agricultura. Otros cultivos potenciales, como el café, el cacao y las naranjas, crecen mejor a menor altitud y en suelos de mayor calidad, por lo que la coca es el único cultivo fiable y rentable (Conzelman 2007a: 145).

Las organizaciones sindicales *campesinas*³ son universales. Tras la liberación de los campesinos de las haciendas en 1953, se les concedieron parcelas individuales. El Movimiento Nacional Revolucionario -MNR- desde el gobierno nacional, formó (y controló) *sindicatos* agrarios, y éstos se unieron en grupos conocidos como *centrales*, que en 1960 se habían unido en seis federaciones provinciales afiliadas a la confederación campesina departamental y nacional (Brewer-Osorio 2021).

Estos sindicatos se crearon para garantizar la distribución equitativa de la tierra, el agua y otros recursos públicos, abordar conflictos internos y representar los intereses de la comunidad. A finales de los años setenta se independizaron del control gubernamental y en los ochenta se formaron organizaciones paralelas de mujeres.⁴ En regiones aisladas, donde la producción de coca se expandió gradualmente a medida que una nueva generación de cultivadores se desplazaba hacia el este, el sur y el norte para escapar de suelos degradados y parcelas demasiado pequeñas para ser subdivididas entre la siguiente generación, los sindicatos evolucionaron a menudo para servir como gobierno local y como representantes de los cultivadores en las negociaciones con el Estado.

En 1989 se constituyó un brazo comercial de los sindicatos, ADEPCOCA (*Asociación Departamental de Productores de Coca*), como reacción a la explotación de los intermediarios de La Paz. Las licencias de productores que expedía ADEPCOCA dieron lugar a su monopolio sobre la venta legal de coca, casi toda procedente de zonas en las que se había cultivado coca durante más de mil años, lo que dio a la organización y a sus dirigentes más peso que el número de cultivadores a los que representaba (Brewer-Osorio 2021). En 1994, las seis federaciones campesinas se unieron en COFECAY (*Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas*), que incluía a productores de todos los Yungas, un grupo más amplio que ADEPCOCA, ya que incluía a agricultores de las zonas de expansión, que no tenían derecho legal a cultivar coca. Las diferencias en cuanto a membresía e intereses

³ *Campesinos* en Bolivia implica también a pueblos indígenas. La mayoría de los *campesinos bolivianos* pertenecen a los grupos étnicos o lingüísticos quechua y aimara (Albó, Libermann, Pizarro, et al. 1990).

⁴ En toda Bolivia, los sindicatos paralelos de mujeres rurales formados como sindicatos campesinos representan la unidad doméstica con el varón de más edad como representante o "cabeza de familia". Sólo en su ausencia es sustituido por una mujer.

generaron fuertes rivalidades entre las dos organizaciones lo que, en ocasiones, han desembocado en conflictos violentos (Vásquez 2021).

En cambio, el Trópico de Cochabamba, más conocido como el Chapare, sólo está poblado desde los años cincuenta del siglo XX. Esta región produce actualmente poco más de un tercio del cultivo de coca de Bolivia, aunque la producción está aumentando allí más rápidamente que en los Yungas. (ONUDD 2023:22). La mayoría de la población se autoidentifica como quechuahablante, y la mayoría es bilingüe, hablando una mezcla de quechua y español.

Antes de la década de 1950, pocas personas vivían en el Chapare, y los que lo hacían eran en su mayoría pueblos indígenas nómadas, los yuracarés y los yuquis, que, a pesar de los esfuerzos de los grupos misioneros católicos romanos por asentarlos a la fuerza en aldeas, mantuvieron gran parte de su vida tradicional, incluida la caza y la recolección (Orellana 1999). Los planes de colonización del gobierno en la década de 1960 para trasladar colonos a las tierras bajas escasamente pobladas, incluido el Chapare, condujeron a la primera ola significativa de migración *campesina*, estableciendo un sistema de producción agrícola caracterizado por pequeñas propiedades de tierra, producción principalmente manual y una fuerza de trabajo basada en la familia (ver Millington 2018, Blanes 1983). Aparte de la coca, los principales cultivos son el arroz, los plátanos y los cítricos. Muchas familias también tienen algunas cabezas de ganado o gallinas, y la mayoría de los niños y hombres se dedican a la pesca.

El auge de la coca en Bolivia se produjo en la década de 1980, cuando se disparó la demanda de cocaína en Estados Unidos. El aumento de la producción coincidió con una grave sequía en las tierras altas y los valles (1982-83), un periodo de hiperinflación y un programa neoliberal de ajuste estructural que devastó la agricultura a pequeña escala y cerró empresas estatales (las más importantes, las minas de estaño) (Kohl y Farthing 2006: 70-75). Los *campesinos* empobrecidos y los antiguos mineros cultivaban coca, ya que era el cultivo comercial más lucrativo disponible.

Dado que la presencia del gobierno boliviano era prácticamente inexistente (véase PNUD 2007), los campesinos se organizaron en lo que ahora son más de 1.000 sindicatos muy unidos, agrupados en seis federaciones con un órgano coordinador general (formado en 1991), a los que más tarde se unieron organizaciones paralelas de mujeres. Estos sindicatos, que forman parte de la misma confederación campesina (la *Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB*) que los cocaleros de los Yungas, desempeñan funciones similares. Se autogobiernan, resuelven conflictos y coordinan las

obras públicas comunitarias. Altamente participativos, los sindicatos emplean prácticas de toma de decisiones indígenas mezcladas con tradiciones sindicales heredadas de los antiguos mineros. Los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de asignar tierras a los nuevos colonos, arbitrar desacuerdos, organizar a sus miembros para construir carreteras o escuelas y castigar los comportamientos antisociales (Grisaffi 2019: 87-102). Aunque las mujeres ejercen una influencia cada vez mayor, el liderazgo sigue concentrándose en gran medida en manos masculinas (Farthing & Grisaffi, de próxima publicación).

Desarrollo alternativo en Bolivia: De mediados de los 80 hasta 2005.

En 1998, la Asamblea General de la ONU definió el desarrollo alternativo como la erradicación de los cultivos prohibidos con el desarrollo rural como mecanismo facilitador (Brombacher y Westerbarkei 2019). Esto hizo que el barómetro del éxito fuera la reducción de los cultivos de coca, no el bienestar de la población. Este enfoque dio forma a la política hasta que el cocalero Evo Morales se convirtió en presidente de Bolivia a principios de 2006.

El primer proyecto de desarrollo alternativo en Bolivia se llevó a cabo en los Yungas, financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas). El proyecto de seis años (1985-1991), conocido como *Agroyungas*, pretendía reducir la dependencia de la coca mediante la expansión de la producción de café. La mayoría de los investigadores lo consideraron un fracaso (Roberts 2010, Leóns 1997). Las variedades de café introducidas resultaron ser más susceptibles a las enfermedades que las variedades locales y el desarrollo del mercado fue inexistente. La ayuda se condicionó a que las comunidades en su conjunto abandonaran primero la coca, lo que generó conflictos intercomunitarios.

A mediados de la década de 1980, Estados Unidos lanzó una política militarizada de interdicción y erradicación dirigida al Chapare. Esta "Guerra contra las Drogas" incorporó programas limitados de asistencia económica, todos ellos condicionados a la erradicación previa de la coca, administrados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida como USAID por sus siglas en inglés). La erradicación de la coca era el objetivo principal, mientras que la búsqueda de alternativas económicas a la coca ocupaba un lugar secundario en cuanto a importancia y financiación (GAO 2002, Jackson et al. 2003).

En 1988, Bolivia adoptó la Ley antidroga 1008, diseñada por "asesores del gobierno" de los Estados Unidos, que permitía 12.000 hectáreas de coca para el mercado interno lícito

(para masticar y hacer té) en "zonas de cultivo tradicional" (mal delimitadas) de los Yungas.⁵ La ley preveía la erradicación del resto de cultivos de coca.⁶ La Ley 1008 exacerbó las ya claras diferencias entre el Chapare y los Yungas: marcadas por la geografía (terreno llano y accesible en el Chapare frente a terreno montañoso y remoto en los Yungas); una historia de haciendas en lugar de colonización campesina que dejó a los Yungas con una élite mestiza local basada en la ciudad; diferentes estructuras sindicales (los Yungas tenían una representación política y comercial separada que los cultivadores del Chapare nunca desarrollaron); personas con identidad indígena aimara en lugar de quechua hablantes; así como sus diferentes experiencias, en particular con la erradicación forzosa, durante la guerra contra las drogas financiada por Estados Unidos. Esta política no sólo trajo menos represión a los Yungas, sino que también creó efectivamente otra fisura en los esfuerzos posteriores por crear un desarrollo participativo con la coca: la división entre zonas tradicionales y de expansión significó que los cocaleros de la zona tradicional rechazaran cualquier cambio que amenazara su estatus privilegiado bajo la Ley 1008.⁷

En el Chapare, el programa de desarrollo alternativo de la USAID fue durante muchos años uno de sus mayores de América Latina y gastó aproximadamente 300 millones de dólares, aunque su financiación palidecía en comparación con la destinada a la policía militarizada y la interdicción (Farthing, 2004: 1). A lo largo de veinte años, se convenció a la mayoría de los cultivadores de coca, normalmente mediante la amenaza que suponía la ampliación de la presencia policial y/o militar y las promesas de asistencia técnica para cambiar a nuevos cultivos, de que participaran en al menos uno de los programas, todos ellos condicionados, algunos con compensaciones (pagos en efectivo para reducir los cultivos de coca) y otros que erradicaban por la fuerza. A diferencia de Colombia y Perú, el gobierno boliviano siempre prohibió la fumigación aérea.

Ante el crecimiento de la producción de coca, el proyecto ya financiado por USAID en el Chapare, el Proyecto de Desarrollo Regional del Chapare (CRDP), diseñado para aumentar la producción agrícola (lícita), fue revisado en 1987 para centrarse en la sustitución

⁵ La Ley 1008 identifica los Yungas de La Paz y los Yungas de Vandiola en Cochabamba, mucho más pequeños, como zonas tradicionales.

⁶ El Chapare fue identificado como una "zona de transición", lo que significaba que la erradicación sería gradual y se complementarían con programas de "desarrollo alternativo". La producción de coca en cualquier otro lugar estaba prohibida por la ley y su erradicación era inmediata (Durand Ochoa 2008).

⁷ La resistencia de las zonas tradicionales de los Yungas significó que el Gobierno de Morales tardó hasta 2017 en aprobar una nueva ley de la coca que sustituyera a la Ley 1008. La nueva ley amplió la superficie de cultivo legal de coca a 20.000 hectáreas. El Gobierno llegó a esa cantidad específica multiplicando la cantidad de coca permitida por cultivador registrado en virtud del acuerdo del cato de 2004 por el número de familias de cultivadores de coca registrados. Sin embargo, como los agricultores de las zonas tradicionales, liderados por ADEPCOCA, habían bloqueado con éxito cualquier límite de cato en las zonas tradicionales de los Yungas durante más de una década, pudieron obligar al Gobierno a concederles 2.000 hectáreas adicionales en la ley de 2017, con lo que el total permitido ascendió a 22.000 hectáreas (Brewer-Osorio 2021).

de cultivos de coca. Esta fue la primera vez que la ayuda estadounidense, especialmente la vinculada al crédito, se condicionó a la erradicación de los cultivos de coca (Jackson et al. 2003). Cuando tanto USAID como el Gobierno boliviano se dieron cuenta de que ningún otro cultivo podía competir directamente con la coca, se puso en marcha en 1991 un nuevo programa, el Proyecto de Desarrollo Regional de Cochabamba (CORDEP), en un esfuerzo infructuoso por frenar la migración al Chapare desde los valles altos de Cochabamba (Potter 2002: 35).

Los tres gobiernos bolivianos de 1985 a 1997 insistieron en que los agricultores del Chapare recibieran pagos en efectivo por erradicar voluntariamente su coca, ya que todos eran conscientes del papel de la coca en la absorción de mano de obra y buscaban minimizar los enfrentamientos con los cada vez más poderosos sindicatos cocaleros del Chapare (Brewer-Osorio 2020: 269). En la práctica, muchos campesinos erradicaron su coca, recibieron la compensación, plantaron los cinco cultivos del programa (plátano, piña, maracuyá, palmito y pimienta negra), pero al no producir ingresos, en gran parte porque USAID no invirtió casi nada en comercialización, volvieron a plantar coca (Farthing 2004).

Cuando Hugo Banzer asumió la Presidencia en 1997, se adoptaron por primera vez la erradicación forzosa y la interdicción militarizada, que EE. UU. había impulsado desde el principio. Este "Plan Dignidad" fue llevado a cabo por unidades policiales y militares entrenadas y financiadas por EE. UU., con repetidas detenciones, acoso y, en el caso de las mujeres, agresiones sexuales (Ledebur 2005). En consonancia con la *teoría del globo* de los cultivos,⁸ la erradicación forzosa en el Chapare, que produjo la mayor parte de la hoja de coca de Bolivia hasta principios de la década de 2000, hizo que la producción se disparara en los Yungas (Windle y Farrell 2012).

Entre 1997 y 2001, se erradicaron por la fuerza unas 45.000 hectáreas de coca del Chapare y el programa de desarrollo alternativo, que carecía de fondos suficientes, no pudo seguir el ritmo (GAO 2002). Esto provocó una grave crisis económica para las aproximadamente 45.000 a 50.000 familias cocaleras. A pesar de la catastrófica caída de sus ingresos en efectivo, no fueron tantos los que emigraron como se esperaba.⁹ Muchos agricultores volvieron a plantar en el mismo lugar o muy cerca (Lishfer 2003).

Sólo se hizo un intento de erradicación forzosa en los Yungas. En junio de 2001, Banzer envió a las mismas tropas financiadas y entrenadas por EE. UU. que operaban en el

⁸ La teoría del globo argumenta que, dado el alto valor de los cultivos de drogas y las limitadas alternativas, cuando los cultivos ilícitos se erradicán en una zona simplemente se vuelven a plantar en otro lugar.

⁹ Las salidas para la migración se habían reducido sustancialmente debido al colapso económico de finales de la década de 1990 en Argentina, donde trabajaban hasta un millón de bolivianos.

Chapare a destruir 1.700 hectáreas de coca que EE. UU. consideraba "excedentes" por encima del límite de 12.000 hectáreas establecido por la Ley 1008. Sin previo aviso, los soldados comenzaron a arrancar las plantas de coca en La Asunta, al este de la zona tradicional de Sud Yungas. Cientos de cultivadores, comerciantes, camioneros y estudiantes montaron inmediatamente la resistencia, respaldados por los sindicatos cocaleros locales, obligando al gobierno de Banzer a dar marcha atrás (Farthing y Ledebur 2015:22).

A principios de la década de 2000, la USAID había vuelto a cambiar de enfoque: empezó a hacer hincapié en la producción agrícola y ganadera a escala comercial impulsada por la inversión privada con sede en Cochabamba. Como ninguna de las empresas privadas asistidas por la USAID ni sus instalaciones de procesamiento tenían su sede en el Chapare, aportaron escasos beneficios económicos directos a los cocaleros. Estas empresas fueron acusadas de malversación de fondos, prácticas contables inadecuadas y conflictos de intereses (Pinto Cascán 2003). Las fastuosas estaciones agrícolas, profesionales bolivianos que ganaban en un mes lo que los campesinos en un año, acompañados de supervisores estadounidenses que volvían a cobrar cuatro veces más, yendo y viniendo en jeeps nuevos desde Chapare hasta sus oficinas en uno de los edificios de oficinas más lujosos de Cochabamba, no hicieron sino reforzar la frustración y la desconfianza de los cocaleros (Farthing 2004). En 2006, el director de la emisora de radio de los cocaleros, Egberto Chipana, explicó: "En mi programa solía decir: '¡El desarrollo alternativo tiene los salarios más altos de Bolivia!' ¹⁰

No obstante, en entrevistas realizadas en 2003, los representantes de USAID insistieron en que el programa había tenido un éxito constante: cada año se exportaban más cultivos legales y aumentaban los ingresos lícitos de los agricultores participantes (Farthing 2004:1). Los cocaleros admitieron a regañadientes que la mejora de la infraestructura de carreteras del programa les facilitaba el transporte de sus cultivos (incluida la coca) al mercado. Oscar Coca, administrador para la Mancomunidad de Municipios de Chapare identificó tres problemas principales en el enfoque estadounidense: una estrategia descoordinada que operaba al margen de las organizaciones comunitarias y los gobiernos locales existentes; el condicionamiento inflexible de la ayuda a la erradicación; y una burocracia grande y cara. ¹¹

Mientras que las burocracias hinchadas y costosas son un sello distintivo de la ayuda bilateral y multilateral en todas partes (Easterly 2002), USAID tuvo el obstáculo adicional de

¹⁰ Entrevista, Chipiriri, Chapare, enero de 2006.

¹¹ Entrevista, Villa Tunari, 15 de julio de 2003.

negarse a trabajar con los representantes elegidos por la población meta, los sindicatos de cocaleros, una postura que va en contra de toda sabiduría convencional sobre el desarrollo económico y comunitario. La USAID creó "asociaciones" locales paralelas, con una dirección remunerada, una política que se alimentó de los recuerdos negativos de los campesinos sobre los esfuerzos de la década de 1950 por controlar de forma similar a las poblaciones rurales a través de sindicatos dirigidos por el Gobierno (Albó et al. 1990). La "Ayuda Internacional al Desarrollo" estadounidense describió sistemáticamente a los sindicatos cocaleros como "narcotraficantes" o, como mínimo, que sus dirigentes estaban a sueldo de los narcotraficantes (Rivera 2011). Si bien los productores tenían distinta participación en el tráfico de drogas, eran principalmente campesinos y el sentido de pertenencia y lealtad a su sindicato son muy profundos (Grisaffi 2019).

La negativa a reconocer a los representantes de los cultivadores supuso que los acuerdos entre sindicatos y gobiernos, muchos de ellos vinculados a demandas relativas a la deforestación evitada y a menudo forjados durante periodos de intenso conflicto, se incumplieran repetidamente porque la embajada estadounidense no daba su visto bueno. Además, obligar a los agricultores a renunciar a su fuente más fiable de ingresos en efectivo antes de disponer de alternativas viables condenó los proyectos desde el principio (Lishfer 2003). La desconfianza se agravó porque era poco probable que las familias cocaleras diferenciaron entre las actividades militares y policiales financiadas por Estados Unidos y los programas de desarrollo financiados por Estados Unidos condicionados a la erradicación. En conjunto, estas dinámicas contribuyeron a la inestabilidad política, aumentaron los conflictos violentos y alimentaron las decisiones de los cultivadores de volver a plantar coca (Farthing 2004).

USAID tuvo bastante más éxito en los Yungas. La Iniciativa para el Desarrollo de los Yungas comenzó en 1999 con la intención de abordar la producción de coca de forma "más holística" que en el Chapare, mejorando las carreteras y la atención sanitaria, financiando becas universitarias y proporcionando electrificación rural (Jackson et al. 2003: 9). Los recursos estaban condicionados a la decisión de toda la comunidad de erradicar la coca a cambio de infraestructura social y productiva. A partir de 2001, se dio prioridad a la producción de cafés especiales (y, en menor medida, de té), que tuvo un éxito razonable gracias, en parte, a la mejora del procesamiento del café, una comercialización sofisticada y la creciente demanda internacional de café de alta gama (Jackson et al. 2003). Sin embargo, el proyecto siguió siendo susceptible a las drásticas fluctuaciones de los precios y, en las zonas donde el cultivo de coca era ilegal en virtud de la Ley 1008, se produjeron conflictos

con la policía militarizada que intentaba la erradicación forzosa, similares a los del Chapare (Conzelman 2007b).

Municipios emergentes, el PRAEDAC de la Unión Europea y el acuerdo de cato.

En 1994, la Ley de Participación Popular devolvió la responsabilidad administrativa y la financiación a los municipios, muchos de los cuales se acababan de formar, lo que convirtió al municipio en un lugar importante para el desarrollo social y, en menor medida, económico (Kohl 2003). Aunque USAID proporcionó formación y apoyo a 86 municipios de otras partes de Bolivia (de un total en la década de 1990 de 321), ignoró en gran medida a los gobiernos locales del Chapare, ya que todos ellos, prácticamente sin oposición, han estado controlados por los sindicatos cocaleros y su partido político, el MAS, desde 1995.

En una clara ruptura con la estrategia estadounidense, la Unión Europea inició un programa para el Chapare en 1998 sin condiciones relacionadas con la coca. El *Plan de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare* (PRAEDAC) también se comprometía a secuenciar la financiación del desarrollo: apoyaba la titulación de tierras, el fortalecimiento de la capacidad administrativa municipal, la gestión de los recursos naturales y el acceso al crédito. Aunque el PRAEDAC era similar a otras instituciones de desarrollo bilaterales y multilaterales, lo que lo distinguía de USAID era su voluntad de trabajar con organizaciones locales establecidas sin exigir la erradicación de la coca y su compromiso con la secuenciación. Carlos Hoffman, director de Programación Municipal de la UE, explicó:

Nuestro planteamiento es radicalmente distinto al de Estados Unidos. Nuestra actitud es que ayudaremos a los campesinos a mejorar sus vidas y entonces abandonarán las drogas.
... USAID lleva a cabo proyectos de los que el municipio no sabe nada, lo que hace absolutamente imposible un verdadero proceso de planificación (Farthing y Kohl 2005: 9).

El ex alcalde Felipe Cáceres, insistió en que "en ocho años, con una cuarta parte del dinero, los municipios han conseguido diez veces lo que la USAID logró en 20 años".¹² El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2002-7 para el consorcio (*Mancomunidad*) de municipios del Chapare identificó nueve problemas principales: una base productiva débil, baja productividad e inversión agrícola, ganadería subdesarrollada, escasa cobertura sanitaria, altos niveles de desnutrición, vivienda precaria, bajos niveles educativos y una administración pública débil.

¹² Entrevista, Villa Tunari, 15 de julio de 2003.

El Plan resultante dio prioridad al desarrollo humano y económico e incluyó la construcción de aulas y viviendas para los profesores, la inversión en sistemas de agua y el mantenimiento de las redes eléctricas urbanas (Mancomunidad 2002).

Los municipios del Chapare utilizaron técnicas de evaluación rural participativa para redactar sus PDM y recurrieron en gran medida a los líderes comunitarios y sindicales para recabar información (Gobierno Municipal de Villa Tunari 1997: 8-9). La planificación era más participativa que en la mayor parte del país, y aunque los empleados de las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñaban un papel clave, los dirigentes sindicales esperaban que las ONG transfirieran conocimientos específicos de planificación a los empleados municipales.¹³ Además, se desarrolló cierto grado de movilidad horizontal entre los municipios y las ONG, lo que proporcionó al Chapare un mayor acceso a mano de obra cualificada que otros municipios comparables. Los observadores coinciden en que el PRAEDAC ayudó a desarrollar la capacidad administrativa, pero acuerdan en la necesidad de una supervisión municipal independiente, ya que un partido político (el MAS) controlaba (y sigue controlando) todos los municipios.¹⁴

En los Yungas, la Ley de Participación Popular tuvo un impacto mucho menor sobre los cocaleros. A medida que las competencias de gobernabilidad se cruzaban cada vez más con los mandatos sindicales, creció la competencia entre los sindicatos y los municipios ya establecidos de los Yungas. En el Chapare, los sindicatos tomaron efectivamente el control de municipios recientemente creados, integrándolos dentro de la estructura sindical (Grisaffi 2019: 163-168). En los Yungas, los municipios más importantes de Chulumani y Coroico, ambos en la zona tradicional de cultivo de coca, fueron fundados cien años antes y controlados por élites locales que el Chapare nunca tuvo.¹⁵ Esto dificultó el control o incluso la influencia de los sindicatos.¹⁶ Además, las diferencias entre partidos políticos (algo que no ocurre en el Chapare), la división entre zonas tradicionales y de expansión, así como entre el sindicato y el brazo comercializador de los cocaleros, fomentaron las divisiones dentro y entre los municipios de los Yungas (Conzelman 2007a: 159). Los municipios y su estructura de coordinación general, la *Mancomunidad de los Yungas*, entraron en conflicto con los sindicatos en algunas zonas, como Irupana, donde los sindicatos querían un mayor papel de

¹³ Entrevistas: Diego Ayo, consultor de US AID sobre municipios, La Paz, 4 de agosto. 2003; Alfredo Antezana Lafuente, Director del Servicio de Desarrollo Integral (SEDEI) Cochabamba, 28 de julio de 2003; Carlos Hoffman, Coordinador PRAEDAC. Villa Tunari, 30 de julio de 2003; Godofredo Reinicke, Defensor del Pueblo, Cochabamba, 20 de julio de 2003.

¹⁴ Entrevistas: Cochabamba, julio y agosto de 2003. Ibid.

¹⁵ En toda Bolivia, las luchas por los recursos municipales se libran entre las ciudades y sus zonas rurales, que son casi siempre más pobres e indígenas.

¹⁶ En los municipios de zonas de expansión como Caranavi y La Asunta, formados en 1992 y 1998 respectivamente, los cocaleros tenían mucha más influencia.

planificación, más parecido a cómo operan los sindicatos en el Chapare (Jackson et al. 2003: 39).

A principios de la década de 2000, USAID dio un giro decisivo cuando decidió trabajar con seis municipios de los Yungas sin condiciones de erradicación de la coca. El proyecto de Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (DDCP), que prestó especial atención al aumento de la participación de las mujeres, consiguió proporcionar a los líderes electos y a su personal asistencia técnica en planificación municipal participativa, administración tributaria y gestión financiera (Jackson et al. 2003).

El siguiente cambio, al dejar de condicionar la ayuda al desarrollo a la erradicación y pasar a una mejor secuenciación, se produjo a finales de 2004, cuando el presidente Carlos Mesa, cansado de las constantes protestas y la violenta represión policial, accedió a una antigua demanda de los cultivadores y permitió una parcela de subsistencia de hoja de coca (conocida como *cato*).¹⁷ El conflicto remitió casi de inmediato. "Es muy sencillo", dice Celestina Ticona, "El cato nos permite alimentar a nuestras familias".¹⁸ "Compramos nuestra parcela y construimos nuestra casita gracias al cato", confirmó Alieta Ortiz, que trabajaba en una radio comunitaria del Chapare.¹⁹

Desarrollo integrado con coca y programa de control social de la coca.

Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia a principios de 2006, prometió reafirmar la soberanía nacional y revalorizar la cultura indígena, empezando por la hoja de coca. Su administración formalizó rápidamente el programa cato a través de su Plan de Desarrollo Integral con Coca (2006-2010) y, en 2008, aprovechó el éxito del cato para introducir un enfoque novedoso, financiado en parte por la UE hasta 2013, denominado "control social de la coca". El énfasis en la participación comunitaria y el respeto de los derechos humanos la convierten en la primera iniciativa mundial de reducción de daños por el lado de la oferta (Farthing y Kohl 2012).²⁰ "Decidimos dejar atrás las ametralladoras, las balas y las bombas. Optamos por incluir a las comunidades cocaleras en el debate y el

¹⁷ Debido a las diferencias topográficas y de rendimiento de los cultivos, un cato comprende 1600 metros cuadrados en el Chapare y 2500 en los Yungas.

¹⁸ Entrevista, Caranavi, 26 de enero de 2014.

¹⁹ Entrevista, Villa Tunari, 31 de enero de 2014.

²⁰ La reducción de daños hace referencia a las políticas que se esfuerzan por minimizar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas adversas de las drogas psicoactivas legales e ilegales.

análisis que crearon nuestras políticas", explicó el ex alcalde del Chapare y ahora viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.²¹

Una nueva Constitución aprobada en 2009 reconoció por primera vez los usos tradicionales de la hoja de coca. Bolivia solicitó con éxito a las Naciones Unidas en 2013 una reserva que permite legalmente el cultivo y el uso de la coca dentro de sus fronteras. En 2017, Bolivia aplicó una nueva ley sobre la coca. A menudo calificada de "nacionalización" de la política de drogas, la ley reconoce la importancia cultural, histórica y económica de la coca para las comunidades indígenas y formaliza el acuerdo del *cato*, al tiempo que intenta evitar que la coca llegue al comercio ilícito de drogas. A principios de 2023, a petición de Bolivia y Colombia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició un "examen crítico" de la hoja de coca de un año de duración que podría dar lugar a recomendaciones para modificar la clasificación de la coca en los tratados de fiscalización de drogas de la ONU (NPR 2023).²² Si Bolivia y Colombia tienen éxito, este cambio podría abrir mercados legales a escala internacional para los productos derivados de la hoja de coca, al tiempo que reivindicaría los derechos indígenas.

Para promover el control social sobre el cultivo de coca, entre 2008 y 2013, la UE financió el Programa de Apoyo al Control Social (PACS) en torno a los sindicatos, privilegiando los derechos colectivos sobre los individuales. Con un presupuesto aproximado de 13 millones de dólares, llevó a cabo una campaña de concienciación para convencer a los cultivadores de que limitaran cooperativamente la producción, reforzó la coordinación estatal/sindical e intersindical e integró a los secretarios de control de la coca en la dirección de los sindicatos.

"No fue nada fácil", explicó Marcela López, dirigente sindical del Chapare que colaboró con el PACS. "Algunos dirigentes sindicales locales dedicaron tiempo y esfuerzo para que así fuera. Otros no, lo que fue difícil".²³ El programa estima que efectivamente llegó al 30-40 por ciento de los sindicatos del Chapare, y que el 88 por ciento de la coca erradicada durante el programa fue removida a través de esfuerzos cooperativos con los cultivadores (Farthing y Ledebur 2015: 25). Durante los cinco años del programa, el cultivo de coca en Bolivia se redujo de 30.500 hectáreas a 23.000, un descenso del 32% (ONUDD 2018: 18; ONUDD 2010: 162). Si bien volvió a disminuir en 2014 y muy ligeramente otra vez en 2015,

²¹ Entrevista, La Paz, 27 de enero de 2015.

²² Un estudio previo de la OMS realizado en 1995 concluyó que la hoja no tenía efectos perjudiciales para la salud. Aunque el estudio acabó filtrándose al público, su publicación oficial fue suprimida por Estados Unidos, que amenazó con suspender la financiación de investigaciones de la OMS si se publicaba (Transnational Institute, 2003).

²³ Entrevista, San Isidro, Chapare, 15 de enero de 2021, cortesía de la Red Andina de Información.

ha aumentado constantemente desde entonces (UNODC 2023a: 21). Sin embargo, el hecho de que las variaciones en las cantidades de hojas a lo largo del tiempo en el Chapare hayan reflejado las de los Yungas, donde el control social tuvo mucho menos impacto, refuta cualquier idea de que este programa por sí solo haya tenido un efecto determinante en los niveles de producción.

El ex agregado de Cooperación de la UE, Nicolaus Hansmann, explicó que "gran parte del impacto positivo del control social se debe a tres elementos técnicos: el registro biométrico de casi todos los cultivadores, excepto en la zona tradicional de los Yungas, la titulación de tierras (justo debajo de 480.000 hectáreas) y la vigilancia por satélite financiada por la ONU, que permite un control cruzado de la coca". Sin embargo, al mismo tiempo que la titulación aumentó la seguridad y la capacidad de utilizar la tierra como garantía de préstamos, también ha despojado a los sindicatos locales de la base de su autoridad, debilitándolos y, en el proceso, haciéndolos más susceptibles al control estatal (Grisaffi 2022).

El Censo Agrario de 2013 y los esfuerzos iniciales para incorporar a los comerciantes de coca con licencia en el registro electrónico fortalecieron el esfuerzo. "El escenario ideal es cuando los productores arrancan su propio exceso de coca", continuó Hansmann.²⁴ Esto ocurrió en Irupana, en los Yungas, y en algunas zonas del Chapare, cuando los sindicatos locales y los monitores del Gobierno anunciaron una inminente inspección de las parcelas de los productores.

La motivación de los cocaleros para participar estaba vinculada a una profunda lealtad a Evo Morales y un profundo respeto por la hoja de coca, estrechamente entrelazados con la necesidad práctica de los ingresos de subsistencia que aporta *el cato*. Los cocaleros, ya fuera como agentes de extensión agrícola o inspectores, viceministros o, hasta 2019, el propio presidente, eran en gran medida los ejecutores del programa, lo que potenciaba enormemente un profundo sentido de apropiación. Los hombres ocupaban casi todos estos cargos, lo que llevó al PACS a financiar delegadas femeninas de control social. Sin embargo, la asignación de otros deberes sindicales, así como las continuas responsabilidades domésticas, impidieron un papel pleno para las mujeres.

La heterogénea característica de los Yungas hizo que el control social fuera mucho más difícil de aplicar allí. El sistema de cato se introdujo en 2006, y el registro posterior concluyó en las zonas no tradicionales en 2011, tras exitosas negociaciones con los sindicatos

²⁴ Entrevista, La Paz, 30 de enero de 2014.

de cultivadores. Pero persistieron los conflictos entre las zonas cocaleras tradicionales, donde los cultivadores se negaban a limitar o regular la producción, y las zonas de expansión que habían aceptado el *cato* por miedo a perder todos los derechos sobre el cultivo de coca.

Se hicieron esfuerzos para adaptar el programa. "Debido a las diferentes características de cada región y microrregión", explicó el director del PACS, Pedro Ferrano, en 2014, "hemos adoptado reglamentos específicos y distintos para cada zona".²⁵

Inicialmente, dadas las distintas configuraciones organizativas, legales y espaciales de los Yungas, la mayoría de los agricultores destinatarios rechazaron por completo el programa.²⁶ Los líderes de ADEPCOCA lideraron la resistencia, argumentando que aceptar el límite de *cato* destruiría su estatus bajo la Ley 1008 (Brewer-Osorio 2021). No obstante, los agricultores de los Yungas en Caranavi, Irupana y Circuata finalmente se unieron antes de que terminara el financiamiento de cinco años de los PAC.

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), creado sobre la base del anterior programa de café especial de los Yungas de USAID, utilizó financiación de la UE y del Estado boliviano para aprovechar la subida de los precios del café en 2011 y 2012 y fomentar un aumento de la producción. En 2012, el café superó a la coca en valor y superficie, pero a principios de 2013 los precios internacionales cayeron durante varios años, socavando la viabilidad a largo plazo del café como sustituto de la coca.

Al estabilizar la situación de seguridad en el Chapare, trabajar directamente con los sindicatos cocaleros y reconocer la coca como una fuente fundamental de ingresos familiares, el Gobierno colocó a los agricultores en una mejor posición para experimentar con alternativas. "Permitimos el cultivo de coca, pero la idea es reducir gradualmente la dependencia de los cultivos de coca", explicó en 2019 John Cornejo, director técnico del Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FONADIN), financiado parcialmente por la UE.²⁷ La ayuda se secuencia a través de los ingresos del *cato*, que en promedio sólo superan ligeramente el salario mínimo, pero representan un ingreso garantizado, lo que reduce el riesgo de experimentar con alternativas. La financiación ha apoyado el aumento de la mecanización, como máquinas para descascarillar el arroz, tractores, cadenas de suministro con temperatura controlada para productos lácteos, así como para plantas de procesamiento de frutas, miel y pescado, servicios veterinarios e insumos agrícolas como plántulas, fertilizantes y herramientas.

²⁵ Entrevista, La Paz. 27 de enero de 2014.

²⁶ Ibid.

²⁷ Entrevista, La Paz, julio de 2019.

En lugar de que las agencias trabajen de forma aislada, como ocurría con USAID, las ramas del gobierno colaboraron para desarrollar la sanidad, la educación y las infraestructuras físicas. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha incorporado el concepto de desarrollo integrado con la coca en todos sus programas. Los líderes cocaleros se reúnen periódicamente con funcionarios del FONADIN para establecer prioridades, y los cooperantes y funcionarios gubernamentales asisten a las reuniones de los sindicatos cocaleros. Por ejemplo, durante el ciclo de proyectos de 2017, FONADIN, en colaboración con los gobiernos municipales, canalizó más de 2,7 millones de dólares a 38 proyectos para el Chapare, beneficiando a 15.172 familias (FONADIN 2018, 112). Esto se tradujo en nuevos puentes, electrificación generalizada y aumento de servicios sociales. En 2018, León de la Torre Kraiss, embajador de la UE en Bolivia, argumentó: 'El FONADIN (...) no promueve proyectos que nacen en los escritorios de los técnicos, sino que ayuda a dar vida a iniciativas que surgen de las comunidades' (FONADIN 2018, iii).

A principios de 2019, los agricultores y los trabajadores de divulgación del gobierno dijeron que el desarrollo integrado está funcionando. 'Nuestro Presidente está buscando activamente mercados para el café. ¿Cuándo a otros gobiernos se les ocurrió hacer eso?', dijo el ex dirigente sindical Eusebio Rubios.²⁸ Edilberto Godoy, dirigente sindical que trabajó para el gobierno municipal de Villa Tunari, explicó que el gobierno local había ayudado a desarrollar más de 300 estanques piscícolas y que ahora había más de 1.000 funcionando comercialmente en el municipio.²⁹ Vicente Villaroel Cruz, trabajador de divulgación comunitaria de FONADIN, dijo que ahora funcionan 3.000 piscifactorías comerciales en todo el Chapare.³⁰

Resultados del proceso.

En las zonas donde los sindicatos son fuertes, el *modelo de control social* redujo indiscutiblemente la violencia estatal previa. Cuando contó con financiación, también demostró ser más eficaz para reducir la superficie de coca y promover el desarrollo que la represión policial y militar, y amplió con éxito los derechos sociales y civiles (Grisaffi, Farthing y Ledebur 2017). A pesar de sus deficiencias, el programa ha sido reconocido como

²⁸ Entrevista, Chimoré, 7th septiembre de 2019.

²⁹ Entrevista, Villa Tunari, julio de 2019).

³⁰ Entrevista, Chimoré, 26 de julio de 2019.

una "mejor práctica" por la Organización de Estados Americanos (OEA 2013) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró en 2019 que "el gobierno [boliviano] ha ayudado a estabilizar los ingresos de los hogares y ha colocado a los agricultores en una mejor posición para asumir el riesgo de sustituir los cultivos ilícitos por alternativas" (PNUD 2019: 9).

A mediados de 2018, el comisario de la UE para el Desarrollo en Bolivia, Neven Mimica, tuiteó: "La lucha contra el narcotráfico en #Bolivia avanza gracias a la cooperación de la #UE centrada en el desarrollo alternativo y la aplicación de la ley." En contraste, Estados Unidos fue sistemáticamente crítico, etiquetando repetidamente a Bolivia como uno de los países menos cumplidores del mundo en el control de las exportaciones de drogas (White House 2012, ONDCP 2020) y ha incluido a Bolivia en la lista negra de países descertificados todos los años desde 2008 (Brewer-Osorio 2021: 577).

Los sindicatos de cocaleros, como cualquier otra organización, no son inmunes al incumplimiento ni a la corrupción. Muchos agricultores del Chapare solicitaron inicialmente otro cato registrando parte de sus tierras como propiedad de un familiar y también había cocaleros que nunca han logrado registrar sus catos (Ramos et al., 2023). Los agricultores se quejan repetidamente de que no pueden mantener a sus familias únicamente con los ingresos de un cato (Grisaffi 2019: 141-145). Los agentes del Gobierno replicaron que no deben esperar hacerlo, sino que necesitan desarrollar otras fuentes de ingresos mediante la diversificación de cultivos (Opinión 2011).

Los debates sobre la aplicación del cato se producían en todas las reuniones sindicales locales y podían durar hasta tres horas (Grisaffi y Ledebur 2016: 11). En algunos lugares, los dirigentes sindicales intentaban sacar ventaja. "No es que nunca antes hayamos tenido abuso de poder en los sindicatos o su uso para el enriquecimiento personal, pero esta nueva generación de liderazgo a veces utiliza la desconfianza histórica hacia el Estado para menospreciar las instituciones recién creadas. A veces esto puede llevar a la manipulación de las normas de control social para su beneficio personal", explicó Godofredo Reinicke, director de Puente Investigación y Enlace.³¹

La política del MAS también trastornó el entendimiento tácito entre los cultivadores y sus sindicatos que reconocían que casi todos los cultivadores de coca tenían vínculos directos o indirectos con el tráfico de cocaína. Cuando los líderes sindicales, buscando avanzar dentro del gobierno del MAS, establecieron controles antidrogas, los productores se sintieron

³¹ Entrevista, Cochabamba, 20 de abril de 2012.

traicionados, porque sus líderes estaban ignorando sus obligaciones principales: “gobernar obedeciendo” y proteger los medios de vida de sus miembros (Grisaffi 2022b). La gestión de esta tensión llevó a acuerdos que, según describió un empleado de largo plazo y de rango medio de la agencia de control de cultivos (UDESTRO), implicaban pagos para permitir a la gente catos adicionales, informes insuficientes y que los sindicatos a menudo hacían la vista gorda.³²

El Chapare y los Yungas, junto con el resto de Bolivia, se transformaron durante el repunte de la inversión pública y la economía tras la llegada de Morales al poder en 2006. El gobierno impulsó políticas redistributivas, al tiempo que aumentaba la participación política mediante la indigenización de la esfera política, la reescritura de la Constitución, la nacionalización de sectores económicos estratégicos y la inversión en servicios públicos. Las condiciones de vida mejoraron significativamente (Crabtree y Chaplin 2013). Por ejemplo, en Chulumani, en los Yungas, el saneamiento básico aumentó un 23% entre el censo de 2001 y 2012 y el analfabetismo femenino se redujo del 20,3% al 6,9% (Apaza Quispe 2019: 11). "Antes, los hijos de los cocaleros no pensaban más allá de la coca. Pero ahora, trescientos estudiantes acaban de graduarse de un colegio. Hace diez años, solo había 7 u 8", dijo el ex viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres.³³ La secuenciación de la ayuda al desarrollo significó que un programa estatal de vivienda ha sustituido muchas chozas de madera por casas de ladrillo, y la mayoría de los hogares de bajos ingresos, excepto los más remotos, tienen ahora acceso a servicios básicos (ERBOL 2015).

Gracias a las becas del gobierno, los institutos técnicos y una nueva universidad indígena local, los hijos de los cocaleros pueden ahora cursar estudios postsecundarios a nivel local. El acceso a préstamos públicos baratos ha permitido la creación de pequeñas empresas (como tiendas y taxis). Un informe de la Agencia Alemana de Desarrollo (GIZ) describe el Chapare como "un espacio de oportunidades económicas... y mejores condiciones de vida" (Addicks et al. 2010: 39). El aumento de los derechos de ciudadanía ha fomentado una aceptación sin precedentes de la otrora odiada policía antidroga (la FELCN y su unidad rural, UMOPAR). Cuando el programa de control social recibió pleno apoyo, en algunas regiones, era “malo para el negocio”, según el ex director de la FELCN, Gonzalo Quezada, "los propios cultivadores delatan a los traficantes, algo que nunca habían hecho antes" añadió.³⁴

³² Entrevista, Cochabamba, 25 de julio de 2023.

³³ Entrevista, La Paz, 27 de enero de 2015.

³⁴ Entrevista, La Paz, 28 de enero de 2014.

La dependencia de la coca disminuyó. El dirigente sindical Edilberto Godoy explicó que muchos campesinos cambiaron su visión del papel que desempeña la coca en su economía familiar: "Se gana dinero para llenar el estómago con otra cosa, pero la coca es para ahorrar", dijo.³⁵ Un dirigente de un sindicato cocalero comentó: "Hoy no sólo somos cocaleros, también somos *bananeros y palmiteros*".³⁶ En 2015, el plátano, los cítricos y el palmito cubrían más tierras cultivadas que la coca en el Chapare, un resultado que la ONU atribuyó a los esfuerzos sostenidos e integrados de desarrollo (Grisaffi 2016: 161).

Industrialización de la coca.

Más allá de la diversificación de cultivos, un aspecto central del concepto de incorporación de la coca al desarrollo es la absorción del exceso de producción de coca mediante usos alternativos de la hoja de coca, altamente nutritiva. Los sindicatos de cultivadores han animado a sus miembros de base a cultivar coca orgánica para utilizarla en 30 productos diferentes, como té, harina, champú, cremas para la piel, bebidas y píldoras dietéticas (EDISC 2021: 33). Esto fue respaldado por la construcción en 2008, financiada por Venezuela, de una planta de procesamiento de coca EBOCOCA en el Chapare (Brewer-Osorio 2021). Sin embargo, la planta funcionaba muy por debajo de su capacidad y, durante una visita en 2023, el camino de entrada estaba totalmente cubierto de maleza. En 2019, Edilberto Godoy dijo a nuestro equipo: "Tenemos que hacer más estudios. ... Si podemos industrializar la coca, eso ayudará a contrarrestar el narcotráfico".

Un proyecto de hoja de coca orgánica en el sur de los Yungas, donde el monocultivo de coca ha causado una importante degradación ecológica, tuvo cierto éxito durante el programa de control social. Bruno Terceros, que trabajó para el PACS, explicó: "Trabajamos para certificar 500 parcelas como orgánicas según criterios europeos, lo que nos llevó varios años. Hay mercado para este tipo de coca, y los 2.800 cultivadores que actualmente cultivan orgánicamente no pueden satisfacer la demanda. Tenemos mucho interés internacional en esto, porque se trata de proteger los suelos y el medio ambiente".³⁷

Sin embargo, los esfuerzos para ampliar los mercados a nivel internacional hasta la fecha no han conseguido mucha tracción. A pesar de firmar un acuerdo con Ecuador en 2018, las exportaciones de coca se estancaron después de que el aliado de Morales, Rafael Correa,

³⁵ Entrevista, Villa Tunari, 16 de enero de 2014.

³⁶ Entrevista, Chimoré, 17 de enero de 2014.

³⁷ Entrevista, La Paz, 28 de febrero de 2013.

dejara el cargo. La expansión de las exportaciones al norte de Argentina, donde tradicionalmente se consume coca, no ha tenido mucho éxito debido a los compromisos argentinos de aumentar la producción local.

Pero, por el lado positivo, México ha expresado su interés en llevar a cabo investigaciones sobre plantas medicinales andinas, incluida la hoja de coca, lo que posiblemente podría conducir a la ampliación de los mercados de la hoja en América Latina (Chulver Benítez, 2020). Bolivia y Colombia esperan que la próxima revisión de las Naciones Unidas por parte de la OMS represente una oportunidad para dismantelar la prohibición de las exportaciones de coca de más de 60 años. "Queremos vender la hoja en todo el mundo por el valor medicinal que sabemos que tiene. Esto nos proporcionaría ingresos legítimos procedentes de la coca y sería bueno para el mundo, que se beneficiaría de nuestra hoja sagrada", afirma el cultivador de Yungas Lucio Mendoza.³⁸

La destitución de Evo Morales y el control de los cultivos de coca.

Tras la asunción al poder de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, su gobierno cerró los mercados legales de coca, anuló las licencias de los productores y utilizó a los militares para reprimir las protestas cocaleras (Brewer-Osorio 2021). Después de que los militares mataran a diez cocaleros del Chapare el 15 de noviembre de 2019 y una turba de derechas incendió la sede de su sindicato, los productores expulsaron inmediatamente a la policía de la región (Farthing y Becker 2021:149). Sin presencia policial, los bancos cesaron sus operaciones en el Chapare, lo que significó que los residentes no pudieron acceder a subsidios y préstamos de emergencia cuando estalló la pandemia del COVID-19. En abril de 2020, el gobierno cortó el suministro de gasolina a la región durante dos semanas con el pretexto de que estaba siendo desviada para la producción de pasta de cocaína. La consiguiente escasez de combustible tuvo graves consecuencias, provocando la muerte de miles de peces en estanques que dependían de bombas de aireación alimentadas con gasolina (AIN 2020).

Con el apoyo de EE. UU., el gobierno de Áñez formuló rápidamente su propia estrategia antidroga, que adoptó una postura de línea dura sobre el consumo, la interdicción y el control de la oferta de drogas y contenía textos tomados de los informes sobre la estrategia internacional de control de estupefacientes de EE. UU. El enfoque anterior fue tachado de

³⁸ Ibid.

"permisivo y poco práctico" y de "mero discurso político" (Ledebur, Farthing y Grisaffi 2020). El ascenso de Añez con su alineamiento con EE. UU. rompió el proceso que se venía construyendo en las zonas cocaleras, que es super importante para ubicar cual es la situación actual.

Casi inmediatamente, la relación entre los cocaleros del Chapare y el gobierno pasó de ser de cooperación a ser de confrontación. Esto marcó el inicio del declive del control comunitario sobre la producción de coca y la promoción de alternativas económicas. Un cocalero nos dijo: "¿Por qué debemos respetar al *cato* si el Gobierno no nos respeta?"³⁹ En las principales ciudades las plantas de coca estaban a la venta, algo no visto desde que Morales asumió el poder y prohibido por la política de Desarrollo Integral con Coca. Este rápido giro de los acontecimientos subraya tanto la importancia de una relación positiva con el Gobierno para un control eficaz de la coca basado en la comunidad como la facilidad con la que puede verse alterada en zonas con profundos antecedentes de desconfianza hacia el Estado.

Aunque el gobierno de Añez suspendió los proyectos de desarrollo existentes, la elección del ministro de Economía y Finanzas en el exterior de Morales, Luis Arce, en octubre de 2020, restableció los programas de desarrollo económico y comunitario a través de un plan cuatrienal (Estrategia de Desarrollo Integral Sustentable con Coca 2021/2025 - EDISC) que estableció agencias locales de desarrollo económico e incorpora el programa de control social bajo el nombre de "control social comunitario" (Chulver Benítez 2020).

Para 2023, el plan sólo ha tenido un éxito limitado a la hora de frenar la expansión del cultivo de coca. En 2021, la superficie cultivada de coca alcanzó sus niveles más altos registrados desde 2008, aunque cayó ligeramente en 2022 (UNODC, 2023a, 22; UNODC 2018, 18). En julio de 2023, un empleado actual de la UDESTRO dijo que su agencia estima que la superficie de cultivo ilegal de coca en el Chapare es equivalente, si no superior, a la superficie de *catos* legales registrados.

Un funcionario (nombre reservado) del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDSSC) atribuyó la expansión a la desvinculación de los agricultores, impulsada por una profunda erosión de la confianza en el Estado, pero también por una menor confianza en el actual presidente Luis Arce, que no tiene antecedentes en los movimientos sociales de Bolivia.⁴⁰ La dirigente sindical local Juana Cervantes cree que la actual administración ve el Chapare como un foco de narcotráfico y ya no apoyará proyectos

³⁹ Entrevista, Chapare, 22 de diciembre de 2019.

⁴⁰ Entrevista telefónica, La Paz, 13 de septiembre de 2022.

productivos, e incluso podría invitar a la DEA estadounidense a volver al país.⁴¹ El secretario general del mayor sindicato de productores del Chapare, Eulogio Franco, subrayó que Arce no entiende las luchas diarias que enfrentan los campesinos.⁴²

Los *cocaleros* también perdieron el acceso privilegiado al gobierno del que disfrutaban bajo el gobierno de Morales. Wilma Choque⁴³, vicepresidenta de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba (FECAMTROP), explicó: "Hoy, cuando viajamos para reunirnos con Lucho (el presidente Luis Arce), no nos recibe. Los ministerios están cerrados para nosotros. Los funcionarios del Gobierno ya no vienen al Chapare; nos evitan'. Destacados dirigentes sindicales fueron sustituidos por leales a Arce, entre ellos Alieta Ortiz⁴⁴, ex reportera de la radio cocalera, y la dirigente sindical Apolonia Sánchez.⁴⁵ Esta selección de dirigentes del Chapare les hizo temer que los cocaleros ya no determinarían la política como lo habían hecho con Morales.

Conclusiones.

Las políticas de control de drogas han tenido con frecuencia un impacto negativo en el desarrollo humano, exacerbando la pobreza, la marginación y la exclusión que alimentan la producción de cultivos de coca en primer lugar (Alimi 2019). Veinte años de desarrollo alternativo financiado por Estados Unidos fueron un intento mal diseñado de justificar las acciones militares y policiales financiadas por Estados Unidos poniendo una cara amable a una política represiva diseñada para separar a los campesinos empobrecidos de sus medios de vida y demonizar una parte antigua y valorada de la cultura andina.

El cambio de Bolivia hacia un desarrollo integrado con la coca que incorporaba políticas de control social ofrecía un camino diferente después de 2006, que eliminaba los condicionamientos y utilizaba una estrategia de secuenciación. Estas políticas contribuyeron a abordar las causas profundas que sostienen los cultivos ilícitos, a reducir la pobreza y a contribuir al crecimiento económico local y sostenido. También han promovido la paz, la justicia y unas instituciones fuertes. El PNUD apoya este enfoque, señalando que las políticas son más eficaces "a través de inversiones a largo plazo en estrategias de medios de vida sostenibles, fortaleciendo el acceso a la propiedad y el control local sobre la tierra,

⁴¹ Entrevista, San Gabriel, 19 de julio de 2023.

⁴² Entrevista, Villa Tunari 21 de septiembre de 2023.

⁴³ Entrevista, Villa Tunari, 21 de julio de 2023

⁴⁴ Entrevista, Villa Tunari 20 de julio de 2023.

⁴⁵ Entrevista, Villa Tunari 20 julio de 2023.

desarrollando mercados e infraestructuras para cultivos o productos que sustituyan a los cultivos ilícitos y garantizando la participación significativa de los agricultores en las estrategias de desarrollo" (PNUD 2016, 10).

La experiencia de Bolivia refuerza que cualquier programa de desarrollo debe basarse en la confianza en los actores estatales y en la ampliación de los derechos de ciudadanía. Antes de hablar de reducción de los citados cultivos, el Estado debe tratar a los agricultores locales como ciudadanos y socios, y no como delincuentes. El reconocimiento legal de una cantidad restringida de coca, combinado con la titulación de tierras, la inversión en infraestructuras básicas y las iniciativas de desarrollo económico crean el tipo de marco necesario para un compromiso estatal positivo.

Las organizaciones sociales fuertes son el elemento crítico en este proceso, como descubrimos en nuestra investigación en las regiones cocaleras de Perú (Grisaffi et al. 2021). Los sindicatos agrícolas con miembros formalmente incorporados a los programas locales de control y desarrollo de cultivos de coca crean contrapartes legítimas. Esto significa que el fortalecimiento de los grupos locales, particularmente en lugares sin una fuerte representación de base, debe ser el primer paso, combinado con el refuerzo de la capacidad y los presupuestos de los gobiernos locales para que estos puedan responder a las demandas de los agricultores.

Es esencial establecer una secuencia adecuada, lo que significa adelantar la ayuda al desarrollo sin pedir a los agricultores que reduzcan primero los cultivos. Pero Bolivia dio un paso más al permitir la coca de subsistencia como ancla para la diversificación de cultivos. Los nuevos criterios de éxito dejaron de hacer hincapié en las cifras de erradicación de cultivos para centrarse en el bienestar humano y el desarrollo. Incluso cuando un producto agrícola sólo tiene usos ilícitos, permitir a los agricultores cultivar una pequeña cantidad del cultivo del que dependen para su supervivencia económica, si se combina con un control participativo y tecnológicamente sofisticado, la mejora de los servicios gubernamentales, el desarrollo económico y la reducción de la represión, les coloca en una mejor posición para reducir su dependencia de un cultivo ilegal. Al hacer hincapié en el respeto de los derechos humanos, el desarrollo social y económico y el aumento de la presencia del Estado en las zonas rurales remotas, el enfoque innovador de Bolivia se esforzó por promover el desarrollo sostenible.

Les autores desean agradecer a todos los que participaron en esta investigación, en particular a las organizaciones de cocaleros y a los cultivadores de coca individuales. También quisieran agradecer a Kathryn Ledebur y a la Red Andina de Información por muchos años de asistencia.

BIBLIOGRAFIA

- Addicks, Gerd, Katharina Hübner-Schmid, y Hugo Cabieses. 2010. "Estudio de la intervención de la Unión Europea en la política sectorial de desarrollo integral y de coca en Bolivia (1998-2010)." GTZ International Services.
http://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/documents/more_info/201105_informe_intervencion_ue_desarrollo_integral_es.pdf
- Andean Information Network (AIN). 2020. "Bolivia and Peru in the Time of COVID."
<https://ain-bolivia.org/wp-content/uploads/2020/05/AIN-Bolivia-and-Peru-Coca-Farmers-in-the-Time-of-Covid-19.pdf>
- Albó, Xavier, K Libermann, F Pifarro, and A Gondinez. 1990. *Para comprender las culturas Rurales en Bolivia*. La Paz, UNICEF.
- Alimi, Deborah. 2019. "An agenda in-the-making: the linking of drugs and development discourses." *Journal of Illicit Economies and Development* 1:37-51.
- Alvarado, Oliver. 2020. "Transportando coca y poder: las chhakas en la construcción territorial del Tropicó de Cochabamba (Bolivia)." *Temas Sociales* 46 (Mayo):10-33.
- Apaza Quispe, Ruth Isabel. 2019. "Centro de formación integral en liderazgo sindical de la Federación Única de Trabajadoras Campesinas "Bartolina Sisa" Municipio de Chulumani " Bachelor of Education, Facultad De Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
- Blanes, Jose. 1983. *De Los Valles al Chapare*. Cochabamba: CERES.
- Brewer-Osorio, Susan. 2020. "Uniting the Opposition: Reform, Repression, and the Rise of the Cocaleros in Bolivia." *The Latin Americanist* 64 (3):257-79.
- Brewer-Osorio, Susan. 2021. "Turning Over a New Leaf: A Subnational Analysis of 'Coca Yes, Cocaine No' in Bolivia." *Journal of Latin American Studies* 53:573-600.
- Brombacher, D, y J Westerbarkei. 2019. "From Alternative Development to Sustainable Development: The Role of Development Within the Global Drug Control Regime." *Journal of Illicit Economies and Development* 1:89-98.
<https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.12/>
- Brombacher, Daniel, y Sarah David. 2020. "From Alternative Development to Development-Oriented Drug Policies." In *Drug Policies and Development*, edited by Julia Buxton, Mary Chinery-Hesse and Khalid Tinasti, 64-78. Nijhoff, Brill.
- Carter, William, y Mauricio Mamani. 1986. *Coca en Bolivia*. La Paz: Editorial Juventud.
- Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). ND. "Mapa de Hidrocarburos, Minería y Pobreza." Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
<http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/04/Mapa-33-Pobreza-minas-hidr.pdf>
- Patricia Chulver Benítez, Coordinadora, 2020, Hoja de Coca: Antecedentes y Perspectivas para su Exportación, La Paz: Fundación Acción Semilla.
https://www.tni.org/files/publication-downloads/libro_hoja_de_coca_accion_semilla_web.pdf
- CONALTID. 2013. Gobierno presenta resultados del Estudio Integral de la Hoja de Coca. La Paz: Secretaria de Coordinación Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), Ministerio de Gobierno.

- Conzelman, Caroline. 2007a. "Coca Leaf and Sindicato Democracy in the Bolivian Yungas: The Andeanization of Western Political Models and the Rise of the New Left." PhD Thesis, Department of Anthropology, University of Colorado at Boulder.
- Conzelman, Caroline. 2007b. "Yungas coca growers seek industrialization but split on legalization." *NACLA: Report on the Americas*.
- Crabtree, John, and Ann Chaplin. 2013. *Bolivia: processes of change*. Zed Books: London.
- Durand Ochoa U. 2008. *Coca o muerte: la radicalización del movimiento cocalero*. Lima: Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- Easterly, William. 2002. "The cartel of good intentions: the problem of bureaucracy in foreign aid." *The Journal of Policy Reform* 5 (4):223-50.
- ERBOL. 2015. "Gobierno anuncia viviendas para madres solteras." http://www.erbol.com.bo/noticia/social/26122015/gobierno_anuncia_viviendas_para_madres_solteras
- Farthing, Linda. 2004. "Rethinking Alternative Development in Bolivia." Washington Office on Latin America. http://www.wola.org/publications/special_update_bolivia_rethinking_alternative_development
- Farthing, Linda, y Thomas Becker. 2021. *Coup: a story of violence and resistance in Bolivia*. Haymarket Books.
- Farthing, Linda, y Thomas Grisaffi. 2024. "On their own terms: How cocalera organizing expanded indigenous women's rights in Bolivia." *Latin American Research Review* 59 (3).
- Farthing, Linda, y Benjamin Kohl. 2005. "Conflicting Agendas: The Politics of Development Aid in Drug-Producing Areas." *Development Policy Review* 23 (2):183-198.
- Farthing, Linda, y Benjamin Kohl. 2012. "Supply-side harm reduction strategies: Bolivia's experiment with social control." *International Journal of Drug Policy* 23 (6):488-494.
- Farthing, Linda, y Kathryn Ledebur. 2015. *Habeas Coca: El control comunitario de la coca en Bolivia*. Nueva York: Open Society Foundations.
- FONADIN. 2018. *Anuario 2018*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.
- General Accounting Office (GAO). 2002. *Report to Congressional Requesters: Drug Control. Efforts to Develop Alternatives to Cultivating Illicit Crops in Colombia Have Made Little Progress and Face Serious Obstacles*. Washington, DC
- Gobierno Municipal de Villa Tunari. 1997. Plan de Desarrollo Municipal (PDM), Villa Tunari, 1997-2001. Villa Tunari, Cochabamba.
- Grisaffi, Thomas. 2016. "Social Control in Bolivia: A Humane Alternative to the Forced Eradication of Coca Crops." In *Drug Policies and the Politics of Drugs in the Americas*, edited by Bia Labate, Clancy Cavnar and Thiago Rodrigues, 11-32. Cham, Switzerland: Springer.
- Grisaffi, Thomas. 2019. *Coca Yes, Cocaine No: How Bolivia's Coca Growers Reshaped Democracy*. Durham, NC: Duke University Press.
- Grisaffi, Thomas. 2022. "Enacting democracy in a de facto state: coca, cocaine and campesino unions in the Chapare, Bolivia." *The Journal of Peasant Studies* 49 (6): 1273-1294.
- Grisaffi, Thomas, Linda Farthing, y Kathryn Ledebur. 2017. "Desarrollo integrado con coca en el Estado Plurinacional de Bolivia: de la erradicación a la mitigación de la pobreza." *Boletín de Estupefacientes* LXI:1. 145-174.
- Grisaffi, Thomas, Linda Farthing, Kathryn Ledebur, Maritza Paredes, y Alvaro Pastor. 2021. "From Criminals to Citizens: The applicability of Bolivia's community-based coca control policy to Peru." *World Development* 146:1-14.

- Grisaffi, Thomas, y Kathryn Ledebur. 2016. "Citizenship or Repression? Coca, Eradication and Development in the Andes." *Stability: International Journal of Security and Development* 5 (1). 1-12.
- Gutiérrez Aguilar, Raquel. 2008. *Los Ritmos de Pachakuti: Movilización y levantamiento indígena - popular en Bolivia*. Buenos Aires: Tinto Limón.
- Jackson, Donald, David Bathrick, Patricia Martin, y Danielle Rodriguez-Schneider. 2003. *Assessment Of The USAID / Bolivia Alternative Development Strategy*. Arlington, Virginia: USAID; Development Associates, Inc.
- Klein, Herbert. 1986. "Coca Production in the Bolivian Yungas in the Colonial and Early National Periods." In *Coca and Cocaine: Effects on People and Policy in Latin America*, edited by D Pacini and C Franquemont. Peterborough, USA: Cultural survival Inc.
- Kohl, Benjamin. 2003. "Democratizing Decentralization in Bolivia: The Law of Popular Participation." *Journal of Planning Education and Research* 23 (2):153-164.
- Kohl, Benjamin, y Linda Farthing. 2006. *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*. London: Zed Books.
- Ledebur, Kathryn. 2005. "Bolivia: Clear Consequences." In *Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy*, edited by Coletta Youngers and Eileen Rosin, 143-184. Boulder, London: Lynne Rienner.
- Ledebur, Kathryn, Linda Farthing, y Thomas Grisaffi. 2020. "Bolivia reverses years of progress with new draconian cocaine policy, supported by the EU." <https://theconversation.com/bolivia-reverses-years-of-progress-with-new-draconian-cocaine-policy-supported-by-the-eu-144386>
- Leóns, Barbara. 1997. "After the boom: Income Decline, Eradication, and Alternative Development in the Yungas." In *Coca, cocaine, and the Bolivian reality*, edited by Barbara Leóns and Harry Sanabria. Albany, N.Y: State University of New York Press.
- Lishfer, Marc. 2003. "U.S. Drug War Ally Bolivia Loses Ground to Coca Farmers." *Wall Street Journal*, 13 May 2003. <https://www.wsj.com/articles/SB105277602959745000>
- Mancomunidad. 2002. *Plan de Desarrollo Integral y Sostenible del Tropicó de Cochabamba*. Cochabamba: Mancomunidad del Tropicó de Cochabamba y Comité de Coordinación de las Federaciones del Trópico de Cochabamba.
- Millington, Andrew. 2018. "Creating coca frontiers and cocaleros in Chapare: Bolivia, 1940 to 1990." In *The Origins of Cocaine: Colonization and Failed Development in the Amazon Andes*, edited by Paul Gootenberg and Liliana Dávalos. London and New York: Routledge.
- Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 2021. *Estrategia de Desarrollo Integral Sustentable con Coca (EDISC) 2021-2025*. https://fonadin.gob.bo/archivos/programas/edisc_2021_2025.pdf
- National Public Radio (NPR). 2023. Why Bolivia and Colombia want coca leaf, cocaine's main ingredient, legalized. 13 de marzo. <https://www.npr.org/2023/03/13/1163028350/why-bolivia-and-colombia-want-coca-leaf-cocaines-main-ingredient-legalized>
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD). 2010. *Informe Mundial sobre las Drogas: Coca y Cocaína*. Viena: Publicaciones de las Naciones Unidas. https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/2.3_Coca-cocaine.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD). 2018. *Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca: 2017*. La Paz, Bolivia..
- Organización de Estados Americanos (OEA). 2013. *Escenarios para el Problema de las Drogas en las Américas 2013-2025*. Washington, D.C.

http://radioprogresoohn.cedoh.org/Biblioteca_CEDOH/archivos/00561%20Escenarios%20para%20el%20Problema%20de%20Drogas%20en%20las%20Americas%202013-2025.pdf

- Orellana, Rene. 1999. "Conflictos y Construcción Territorial Etnica. Caso Pueblo Yuracaré del Río Chapare." En *Conflictos Ambientales. Dos Casos Agua y Territorio*, compilado por Carlos Crespo and Rene Orellana. Cochabamba - Bolivia: CERES.
- Pinto Cascán, Darwin. 2003. "Ojo con la generación 1008—Entrevista con Godofredo Reinicke: El Defensor del Pueblo Chapareño." *El Deber*, 12 October 2003.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2007. *El Estado del Estado en Bolivia: Informe nacional sobre Desarrollo Humano*. La Paz, Bolivia.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2016. *Políticas de Control de Drogas y Desarrollo Humano*. Vienna.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2019. *Dimensiones de desarrollo de la política de drogas: Enfoques Innovadores*. Nueva York.
- Potter, G. A. 2002. *Rhetoric vs. Reality: Alternative Development in the Andes: Final Report*. New York: Drug Policy Alliance.
- Rivera, Silvia. 2011. "Coca: An Indigenous Commodity and Its Paradoxes." *ReVitsa: Harvard Review of Latin America*. Fall:21-25.
- Ramos, B., Benavides, J. P., Vélez, M. A., Gilda, J., y Restrepo, D. 2023. Control social de la coca: lecciones del Trópico de Cochabamba (Bolivia) para Colombia (IISEC - UCB Documento de Trabajo 202203). La Paz, Bolivia: Instituto de Investigaciones Socio-económicas. https://iisec.ucb.edu.bo/assets_iisec/publicacion/2023011.pdf
- Roberts, John. 2010. "Bolivia's Coca Headache: The Agroyungas Program, Inflation, Campesinos, Coca and Capitalism In Bolivia." MA, History, University of Massachusetts.
- Spedding, Alison. 1997. "The Coca Field as a Total Social Fact." In *Coca, Cocaine, and the Bolivian Reality.*, edited by B Léons and H Sanabria, 47-70. Albany, NY: State University of New York Press.
- Transnational Institute, 2003, Coca, cocaína y las convenciones internacionales. <https://www.tni.org/en/publication/coca-cocaine-and-the-international-conventions?translation=es>
- Vásquez, Mauricio. 2021. "Los dos bloques de cocaleros de los Yungas se reunirán por separado este lunes." *El Deber*, 3 Oct 2021. https://eldeber.com.bo/pais/los-dos-bloques-de-cocaleros-de-los-yungas-se-reuniran-por-separado-este-lunes_249555
- White House. 2012. "Presidential Determination on Major Illicit Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2013." The White House, Last Modified September 14, 2012. <https://ain-bolivia.org/wp-content/uploads/2012-White-House-Presidential-Determination-2012-15.pdf>
- Windle, J, y G Farrell. 2012. "Popping the Balloon Effect: Assessing Drug Law Enforcement in Terms of Displacement, Diffusion and the Containment Hypothesis." *Substance Use and Misuse* 47 (8/9):868-76